

PERIODO
PRESIDENCIAL
002523
ARCHIVO

INFORME DE ANALISIS

(AL 19 DE OCTUBRE DE 1990)

MINISTERIO SECRETARIA GENERAL DE LA PRESIDENCIA

A. ANALISIS POLITICO

1. LA "CRISIS" : ¿POLITICA O ECONOMICA?

Un reciente editorial de El Diario (17.10.90) amplió la dirección del debate en curso acerca de la situación económica. Mencionó dicho editorial que :

"La falta de conducción política suscita análisis, discrepancias, discusiones y parálisis, ahondando la crisis, haciendo lentas las reacciones de la autoridad, y suscitando la impresión de que el país comienza a caer en una crisis económica que no es tal". Agrega que el requerimiento de estabilidad y reglas claras "escapa a una cuestión simplemente técnica y ahonda en la verdadera causa de la actual situación, cual es la conducción política".

Entre los fundamentos de este diagnóstico señala el editorialista que se ha producido un curioso cruce de funciones, en que, por una parte, la dirigencia política pone su esperanza en que los resultados de un buen manejo técnico den el soporte necesario para la viabilidad del proyecto político, en tanto los técnicos esperan que las decisiones políticas den un curso adecuado al eventual desate de expectativas de los sectores sociales que dieron su apoyo a la coalición gobernante.

Editoriales como éste recogen un sentimiento que, fundado o infundado, corresponde a la percepción de vastos sectores, no sólo en la derecha opositora sino incluso al interior de la coalición de gobierno.

Por un lado, la cuestión planteada bien pudiera corresponder a las características propias de la fase de instalación del gobierno. El rodaje asociado a esta primera fase y los problemas consiguientes de gestión gubernamental, pudieran ser interpretados por diversos sectores como problemas de "conducción política". Sin embargo, el transcurso de siete meses es un lapso más que suficiente para preguntarse si los problemas de conducción política, en el caso de ser efectivos, no tienen acaso otras explicaciones.

Por otro lado, enfrentamos a una oposición que se sabe minoritaria en lo social, pero que apuesta a nuestro desgaste y a nuestras dificultades como único camino de mejorar sus opciones de poder. Es lógico que ella no dejará pasar ninguna de nuestras vacilaciones, y que esgrimirá un estilo agresivo en la política comunicacional.

La prensa de derecha ha demostrado una alta capacidad de fabricar hechos noticiosos que ponen al Gobierno a la defensiva, sin que hayamos sido capaces de articular ofensivas de opinión en torno a las realizaciones del Gobierno, que son muchas, pero desconocidas. Con demasiada frecuencia, hechos menores, que no representan un verdadero problema nacional, son transformados por la prensa en verdaderos asuntos de estado, situando al Gobierno en la incómoda posición de tener que justificarse. A la inversa, soluciones a problemas masivos de la población, o políticas que representan el inicio de la solución de un problema, se desaprovechan por el mismo Gobierno, el cual no les da el realce que debieran tener.

2. LA TOMA DE DECISIONES POLITICAS TIENE COMPLEJIDADES ADICIONALES EN LA ACTUAL SITUACION.

Ello se manifiesta de diversas maneras:

En primer lugar, puede existir la tentación por parte de algunos sectores de una cierta añoranza por la rapidez y eficiencia del sistema vertical de toma de decisiones que aplicó el régimen anterior. En democracia, los sistemas de toma de decisiones tienen mayores grados de complejidad y descentralización, implican a varias instancias oficiales y deben tener algún nivel de interlocución con organismos sociales.

Lo anterior, sin embargo, no puede ser un obstáculo para una coalición que debió forjarse a través de complejos sistemas de tomas de decisiones. El punto pareciera ser, más bien, introducir una cierta centralización en determinados niveles para hacer operativo el sistema. En el caso de la dirección política del bloque gobiernista ese nivel de centralización no puede ser sólo la figura presidencial. Junto con ella, debe reforzarse una figura o instancia intermedia, con capacidad de dirigir la política más contingente y, en especial, la coordinación en el plano de la lucha de opinión pública y de la política parlamentaria.

En segundo lugar, existe la dificultad de ser un Gobierno de coalición, en vez de la aparente facilidad de los gobiernos de partido único. Este obstáculo se ha manifestado en las relaciones del Gobierno con los partidos de la Concertación y con su base de apoyo parlamentario. En el activo debemos anotar sin embargo que para nada se cumple el pronóstico de la derecha en el sentido que las dificultades y parálisis del Gobierno provendrían de la pugna DC-PS. Adicionalmente, es completamente posible transformar la noción de Gobierno coalicional en un mérito de la Concertación, capitalizando para el Gobierno la idea de colaboración y de acuerdo. A partir de la exitosa experiencia de la coalición, se propone al país una política de acuerdos. RN, en cambio, más allá del discurso, transita al borde del obstruccionismo y del chantaje a la transición

El carácter coalicional del gobierno debe reflejarse en el sistema de toma de decisiones políticas. Sin embargo, parece insuficiente el Gabinete como único espacio de deliberación, porque, dada su periodicidad, ello deja fuera el manejo de los temas contingentes. Una posible solución es reforzar la instancia política no-presidencial que se desempeña como autoridad ordenadora gubernamental.

Un tercer obstáculo para una adecuada conducción política está constituido por la naturaleza del programa de gobierno. En efecto, transcurridos los primeros siete meses de gestión, el programa tiene el rango de un documento de intenciones máximas, que engloban lo que podría llamarse el proceso de transición y consolidación de la democracia. Con esas características no presenta la virtud de constituirse en un plan operativo; es decir, en un documento que indique los medios disponibles para alcanzar las metas, ni la desagregación de objetivos por áreas, ni la calendarización preelectorales que determinarán los años 1992 y 1993.

Es por ello que se hace imprescindible, para ordenar al bloque gobiernista y para no defraudar al electorado, **reformular operativamente el programa de gobierno.**

3. REFORZAR LA CONDUCCION POLITICA.

Para enfrentar esta necesidad deberían adoptarse decisiones de mediano plazo y de corto plazo:

3.1 Para el **mediano plazo** debería considerarse la idea de la elaboración de un programa operativo para la gestión de gobierno 1991-1992. La base de ese programa deberían ser las metas ministeriales actualmente en elaboración.

Se trata de traducir las bases programáticas en prioridades concretas, a partir de lo posible, aunque ello implique -y seguramente será necesario- rebajar las expectativas de los partidos, parlamentarios y dirigentes de base. No nos conviene sembrar altas expectativas, ya que ello es la mejor manera de cosechar desánimo y frustración. Este **segundo momento programático**, que surge de la experiencia del primer año de gobierno, busca comprometer a la coalición desde la base a la cúpula en un compromiso efectivo de realizaciones y, de esa manera, dirigir la presión social antes de que ella se exprese disruptivamente.

En segundo término, se hace necesario definir con mayor precisión el **calendario político** 1991-1993, que, a grandes rasgos, contempla el desenlace de la Comisión Verdad y Reconciliación y, en general, el tema de los derechos humanos; la cuestión de las relaciones con las Fuerzas Armadas y el estatuto jurídico definitivo que haya de regir a estas últimas; las Reformas Constitucionales, incluyendo la cuestión del régimen político, y las elecciones municipales. Todo ello, con miras a la proyección de la Concertación más allá de 1993.

Un tercer elemento de dinamización de la conducción política debe estar centrado en la **democratización municipal**. El costo de la demora de tal reforma no está siendo cargado a la cuenta de la derecha. Su obstruccionismo larvado se ha desarrollado sin reacción por parte de nuestra gente. En esto le cabe un rol significativo a la Concertación y a los partidos, pero debemos admitir que estos operan en base a los estímulos de la dirección política central.

Esta operación debe cumplir el rol de romper el monopolio de la influencia social de los Alcaldes designados, de relegitimar a los parlamentarios y a las autoridades a través de una pedagogía política acerca de la naturaleza de la transición y sus problemas, y de reanimar a las bases concertacionistas, realineándolas en torno a las realizaciones de gobierno de carácter político y social.

Corresponda o no a la realidad, el gobierno debe hacerse cargo de la percepción de diversos actores acerca de las insuficiencias en el nivel de la conducción política.

Esta última debería reforzarse no sólo en cuanto canal privilegiado de información al Presidente, sino como ente ordenador de la gestión gubernamental, incluyendo la dinamización de las relaciones con los partidos y parlamentarios de la Concertación, a fin de fortalecer la coalición de gobierno en su conjunto.

B. INFORME LABORAL

HACIA UNA MEJOR RELACION DEL GOBIERNO CON EMPRESARIOS Y TRABAJADORES

Para un adecuado cumplimiento de las metas gubernamentales definidas para los próximos años se hace imprescindible fortalecer el crecimiento económico dentro de un clima de paz y estabilidad social. El concurso activo y comprometido de trabajadores y empresarios en torno a estos propósitos resulta fundamental.

Sin embargo, en el último tiempo diversos factores han tendido a dificultar los niveles de confianza de empresarios y trabajadores respecto al Gobierno.

Los empresarios observan con preocupación como se suceden acontecimientos calificados como negativos para el desarrollo de la actividad privada: altas tasas de interés producto de un ajuste considerado excesivo; reforma tributaria asociada a un aumento de costos; disminución de la competitividad de nuestras exportaciones como consecuencia del bajo valor del dólar; reformas laborales cuyo texto definitivo es incierto pero "amenazante"; sobre endeudamiento de los sectores productivos que invirtieron a la espera de una reactivación económica que hoy parece postergarse como consecuencia de la crisis petrolera, etc. Con todo, las reacciones oficiales del sector empresarial frente a los problemas derivados de la crisis del petróleo han sido cautas y constructivas, sin que se advierta un ánimo de desencadenar una avalancha de críticas hacia la gestión económica del Gobierno. Sin embargo, subterráneamente comienza a advertirse cierta desazón en el empresariado nacional, la que se hace necesario revertir si se quiere impulsar el crecimiento económico.

La CUT, por su parte, también ha mostrado algunos signos de descontento frente a la actual coyuntura. A la frustración derivada del lento trámite de las reformas laborales se ha sumado el impacto que sobre los asalariados ejerce la inflación provocada por la crisis del Golfo. Sin duda, la Central reconoce que ambos problemas son ajenos a la gestión gubernativa, lo que, sin embargo, no obsta a que se formulen críticas al modo en que el Gobierno los ha enfrentado.

Con todo, el momento actual no puede ser más propicio para rearticular y profundizar un diálogo institucionalizado con la Central. En su discurso de Valparaíso, Manuel Bustos subrayó cuales eran las peticiones de la Central en el momento actual: una mayor agilización de las reformas laborales, y un diálogo efectivo entre autoridades y trabajadores para enfrentar coordinadamente y de consuno los efectos de la crisis petrolera.

CRITERIOS Y ESTRATEGIAS PARA MEJORAR RELACIONES CON EMPRESARIOS Y TRABAJADORES.

Desde una perspectiva formal dos son las alternativas estratégicas para llevar a cabo este intento.

1) **Tripartismo.** Según este modelo, al Gobierno le cabría un rol arbitral activo, ya que no se contentaría con mediar entre ambos sectores productivos, sino que intentaría determinar la agenda temática de las conversaciones.

a. Ventajas:

i) Si se lograra asegurar paz social a partir de estos acercamientos, el Gobierno podría mostrar ante el país un logro de la más alta relevancia política.

ii) Este diálogo tendría lugar durante el período de definición del proceso legislativo concerniente a las reformas laborales. Si se pudieran acercar posiciones entre empresarios y trabajadores, se facilitaría enormemente la negociación parlamentaria.

b. Desventajas:

i) Una estrategia tripartita se justifica cuando el Gobierno debe mediar entre dos actores sociales en pugna, lo que no es del caso en la actualidad. Las demandas de empresarios y trabajadores están dirigidas hacia el Gobierno, y no en contra del otro sector. Es más, los temas a discutir con empresarios y trabajadores son, en algunos casos, tan distintos, que incorporarlos en una misma agenda de discusión sólo tendría por efecto entorpecer las conversaciones y reducir las alternativas y margen de maniobra del Gobierno.

ii) Se ha escuchado en círculos empresariales y sindicales una crítica a la mediación que el gobierno intentó con ocasión de la discusión del texto de las reformas laborales. Cuando el Gobierno arbitra todos se sienten de algún modo perjudicados.

iii) En la medida en que lo que trabajadores y empresarios están solicitando al Gobierno no supone necesariamente perjudicar los intereses del otro sector, no existe necesidad de negociaciones entre trabajadores y empresarios.

iv) Existe frustración en la CUT ante la falta de resultados concretos derivados de la firma del Acuerdo Marco. No será fácil convencer a los dirigentes sindicales sobre la conveniencia de reintentar una operación similar.

v) Si fracasara esta operación tripartita, el daño que esto provocaría sobre la imagen del Gobierno y sobre las expectativas de estabilidad social futura serían muy importantes. Tal riesgo se minimiza en una estrategia bipartita.

2) **Estrategias bipartitas.**

Esto supondría el desarrollo de operaciones paralelas, distintas, pero mutuamente coordinadas y funcionales, de parte del Gobierno hacia los empresarios y trabajadores.

a) **Ventajas**

- i) Siendo la temática y los interlocutores objetivamente distintos, un tratamiento por separado permite una mayor fluidez y eficiencia.
- ii) Si se empantanara alguna de las operaciones, la otra podría continuar su curso, lo que resulta imposible dentro de un esquema tripartito.
- iii) El Gobierno dispondría de una mayor amplitud de alternativas. La agenda podría diversificarse hacia ambos sentidos.
- iv) Si el Gobierno tiene por objetivo mejorar paralelamente las relaciones con empresarios y trabajadores, el esquema bipartito es el más aconsejado. El tripartismo conduce inexorablemente hacia una situación en que alguno de los sectores sociales involucrados siente que el Gobierno actúa parcialmente.

b) **Desventajas**

- i) Así como los riesgos ante el eventual fracaso de una estrategia tripartita son mayores, los frutos políticos de una exitosa estrategia bipartita son ciertamente de menor entidad que los que podrían derivarse de la concreción de un Pacto Social que incluya a trabajadores y empresarios.
- ii) Es probable que trabajadores y empresarios piensen que lo que el Gobierno negocia por un lado, es contradictorio con lo conversado por el otro. Un mal manejo de las operaciones ciertamente puede alimentar las suspicacias en ese sentido.
- iii) Aún cuando la temática a discutir y las estrategias son distintas, el Gobierno debe coordinar en lo fundamental el desarrollo de ambas operaciones. Esto le significará al Gobierno la duplicación de sus esfuerzos mediante la creación de equipos de trabajo especializados.

Comparando las ventajas y desventajas de ambas estrategias, nuestra conclusión es que la mejor decisión reside en elegir el curso bipartito. Esta conclusión se ve reforzada por el hecho de que, en términos de su estrategia más global, el Gobierno tiene que atender, de manera también bifronte, dos objetivos primordiales : **crecimiento y equidad**. La diferenciación de estrategias frente a empresarios y trabajadores es armónica con esa exigencia de atacar, separadamente pero a la vez de manera coordinada e imprimiendo a nuestro accionar una coherencia global, las metas de crecimiento y redistribución. Una estrategia tripartita frente a empresarios y trabajadores introduciría una complejidad adicional en el enfrentamiento de los problemas del crecimiento y de la justicia social, complejidad que los podría hacer inmanejables.

SUGERENCIAS PARA LLEVAR A CABO OPERACIONES BIPARTITAS CON EMPRESARIOS Y TRABAJADORES.

De aceptarse la conveniencia de preferir la estrategia bipartita, corresponde analizar los criterios, mecanismos y temas que debieran estar presente en los acercamientos entre el gobierno por un lado, y trabajadores y empresarios por el otro.

I. Gobierno-Empresarios.

1. Criterios.

a) El Gobierno requiere consolidar la confianza del empresariado nacional en el futuro económico de Chile y en la gestión de las autoridades del área para favorecer así el crecimiento económico en los próximos años.

b) El empresariado debe ser entendido como un agente racional cuyo nivel de organización gremial es más bien escasa y poco vinculante.

c) Dado lo anterior, más importante que llegar a acuerdos con las directivas de la CPC, Sofopa o del Comercio, es necesario transmitir con meridiana claridad la voluntad gubernativa de favorecer la estabilidad en las reglas del juego económico. Los "mensajes" del Gobierno hacia el mundo empresarial deben considerar preferencialmente el manejo de las expectativas, de cuyo sentido depende la opción de los agentes económicos entre la inversión y la especulación.

2. Mecanismos.

a) Dada la actual coincidencia de objetivos en torno a la reactivación económica, se hace más fácil para empresarios y Gobierno consensuar algunas medidas en ese sentido. Si el empresariado percibe que tiene "algún grado de llegada e influencia" respecto a las decisiones económicas, le será más fácil mantener una posición constructiva. La institucionalización de reuniones periódicas entre cúpulas empresariales y Gobierno podría generar un efecto positivo hacia el resto de los agentes económicos.

b) Si Gobierno y empresarios aparecen unidos en torno a la conveniencia de la aplicación de una determinada política monetaria, al Banco Central le sería difícil oponerse a su aplicación. Esta alianza sin precedentes entre el actual Gobierno y los empresarios, podría constituir un paso significativo hacia una política de cooperación mutua.

3. Temas

Además de lo dicho respecto a la estabilidad de las reglas del juego, y en directa relación con aquello, el tema de las reformas laborales volverá a ser el centro del debate político-social de los próximos meses.

La Reforma Laboral.

Como se dijo en el informe pasado, la tramitación de las reformas laborales pendientes encuentra en un mal pie al empresariado nacional, especialmente al pequeño y al mediano. Tales reformas son percibidas por algunos sectores empresariales como una especie de "golpe de gracia", lo que ciertamente endurecerá la posición de quienes rechazan las reformas. Al margen del costo real efectivo que las reformas tengan sobre los empresarios, lo cierto es que existe además un intangible efecto psicológico que afecta las expectativas del empresariado. Lo anterior presenta una disyuntiva de difícil solución al Gobierno.

Un gesto bien recibido por los empresarios sería la aprobación rápida de reformas "moderadas". El costo político de tal opción, sin embargo, sería muy difícil de absorber por el Gobierno. No obstante, una mínima dosis de realismo aconsejaría diseñar desde ya la estrategia a seguir para afrontar la negociación de las reformas laborales pendientes.

II. Gobierno-Trabajadores (CUT)

Manuel Bustos solicitó públicamente al Gobierno el inicio de conversaciones destinadas a buscar acuerdos para enfrentar los problemas derivados de la crisis del petróleo.

Ante esa solicitud, y teniendo en cuenta, además, el potencial conflictivo derivado de la aprobación de reformas laborales insuficientes, y la necesidad de evitar que lo anterior pueda generar un clima de inestabilidad laboral, ha llegado la hora de impulsar una operación con la Central que extienda y profundice la estrategia de diversificación de la agenda.

1. Criterios

a) Al interior de la CUT coexisten tendencias antagónicas respecto a lo que debe ser la actitud de la Central frente al Gobierno. Los sectores más dispuestos al diálogo requieren mostrar a las bases sindicales frutos tangibles derivados de aquél, para evitar que se beneficien los sectores que preconizan una estrategia confrontacional y de choque. Por tanto, del resultado del proceso de diversificación de la agenda con la CUT depende la viabilidad y supremacía de las lógicas de acción sindical que conviven dentro de la Central Unitaria.

b) Si se recoge con prontitud el llamado de Manuel Bustos, le será más fácil a la CUT involucrarse en una operación de la cual se siente su precursora frente a la opinión pública.

c) La CUT ha presentado un paquete de medidas destinadas a compensar la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores. Sin descuidar las condiciones que impidan el crecimiento de la inflación, es recomendable que la respuesta que dé el Gobierno cumpla con dos condiciones:

- que conlleve algún grado de aceptación a las propuestas de la CUT. De esta manera se fortalecería la tesis que sustenta el diálogo con el Gobierno como la mejor manera de alcanzar soluciones.

- que se inserte dentro de la estrategia de diversificación de la agenda que se propone fortalecer y profundizar, de modo que no constituya un hecho inconexo, sino que se constituya en el primer paso de una nueva etapa de las relaciones CUT- Gobierno.

2. MECANISMOS Y ESTRATEGIA

a) Duración de la operación.

Dado que la crisis del petróleo y la discusión de las reformas laborales pendientes podría prolongarse por varios meses, la estrategia a seguir debiera consultar un período de desarrollo de seis meses como mínimo.

b) Coordinación

En círculos sindicales se critica el modo de relación entre la Central y las autoridades gubernamentales, el que estaría caracterizado por una interlocución variada y plural, de la cual surgen señales inconexas e, incluso, contradictorias. En la CUT se dice incluso que ellos han jugado al "compra huevos").

Se echa de menos una autoridad central ordenadora que coordine y de coherencia a los contactos entre la Central y el Gobierno. Para la adecuada implementación de la estrategia sugerida se hace imprescindible contar con un comité interministerial que actúe de modo cohesionado y coherente.

c) Interlocución

A diferencia de lo que ocurre con los empresarios, en el caso de los trabajadores organizados el actor social y políticamente relevante es la CUT. Fuera de ser una entidad formadora de opinión, posee una capacidad de convocatoria y movilización no despreciable. Además, el proceso eleccionario interno que se avecina amerita intentar con ella un acercamiento real y formal que fortalezca las tendencias modernas y dialogantes al interior de la Central. Es por todo lo anterior que el interlocutor obligado del Gobierno es la directiva de la CUT.

d) La diversificación de la agenda

Esta operación requiere el planteamiento por parte del Gobierno y la CUT de una multiplicidad de temas de modo de favorecer un proceso de negociación y concesiones recíprocas que tengan un carácter incremental y no afecten nuestra política económica. La agenda debería poseer un grado alto de complejidad de manera de involucrar significativamente a la Central en ella y neutralizar sus reacciones conflictivas frente a la evolución de la situación económica.

e) Los Compromisos

La CUT ya ha presentado al Gobierno (16 de agosto) una minuta con los temas en cuyo tratamiento está interesada. Al respecto, la CUT y el Gobierno debieran definir sus respectivas prioridades, lo que cada cual está dispuesto a dar y lo que se exige a cambio. Como en toda negociación es fundamental que las partes perciban que la otra asume y respeta los compromisos acordados.

Si la CUT llegara a pensar que la operación en cuestión es una maniobra dilatoria para capear el temporal de la crisis petrolera, el desencanto sindical no tardaría en manifestarse peligrosamente.

Es por eso que es tan importante que el Comité Interministerial que se relacione con la CUT defina con prontitud aquellas materias en que se puede acceder a las peticiones de la Central, y determine las fechas en que tales aspectos serían resueltos positivamente.

f) Complicidad

En esta negociación el Gobierno y la CUT deben actuar más como cómplices que como contrapartes. Debe evitarse a toda costa que las negociaciones con la CUT signifiquen abrir una "Caja de Pandora", desencadenando un proceso incontrolable. En consecuencia, tanto los procedimientos como los objetivos deben estar claramente definidos de antemano.

En la medida, y según el modo, en que el Gobierno defina su estrategia de negociación parlamentaria de las reformas laborales pendientes, puede surgir la necesidad de buscar complicidad con la CUT para desarrollar una estrategia coordinada frente a la oposición.

3. TEMAS

Existe una gran cantidad de áreas en torno a las cuales es posible desarrollar conversaciones fructíferas. En el fondo, de lo que se trata aquí es de abrir los cauces de participación efectiva de la CUT en distintas áreas del acontecer nacional.

En lo deportivo, con la DIGEDER; en lo cultural, con el Ministerio de Educación; en el área de capacitación, con el SENCE e INACAP entre otros; en materia previsional, facilitando la constitución de una AFP de la Central, etc. Sin duda que estas áreas debieran ser objeto de un estudio detallado, el que podría realizarse de forma conjunta entre la Central y la autoridades pertinentes.

Sin embargo, existe un tema cuya inminencia y relevancia son indesmentibles: las reformas laborales. Aunque el objetivo original de la estrategia de diversificación de la agenda suponía contactos bilaterales destinados a sortear las dificultades originadas por la eventual aprobación de reformas "insuficientes", lo cierto es que no parece posible pretender hoy eludir el tratamiento de la materia durante las conversaciones con la CUT.

Cualquiera sea la posición adoptada por el Gobierno respecto a la estrategia parlamentaria a seguir, la CUT debiera ser informada oficialmente sobre la decisión y sus fundamentos. De esta manera se avanzaría hacia la reposición del clima de confianza recíproca que la estabilidad social del país requiere.

CONCLUSION

No será fácil mantener la paz social en Chile si no se satisfacen en alguna medida las expectativas que la CUT tiene respecto del Gobierno y la democracia. Una frustración importante de la CUT, coincidente con tiempos de dificultades económicas, fortalecerá las tendencias reivindicacionistas y de choque aún vigentes en el mundo sindical, las que verán aumentadas sus posibilidades de desencadenar y conducir un proceso de movilización social contrario a los intereses del país y del Gobierno.

La tarea de mejorar las relaciones con los empresarios y con la CUT al mismo tiempo encierra dificultades no desdeñables. Sin embargo, la actual coyuntura obliga a hacer un intento en ese sentido. A la larga, los empresarios se beneficiarán de la paz social que se logre consolidar. Por su parte, los trabajadores recibirán los frutos de una mayor inversión y crecimiento impulsados por la empresa privada. Para que sea ésta la percepción que se imponga tanto en el mundo sindical como empresarial, es preciso que los acercamientos del gobierno hacia cada uno de ellos no sea percibida como una deslealtad por el otro.

C. CONSIDERACIONES SOBRE LAS POLITICAS JUVENILES DEL GOBIERNO

La focalización de los jóvenes como un sector social relevante, con particulares dificultades para acceder a ciertos niveles de calidad de vida, ha sido asumida por el Gobierno como un compromiso que se materializa, entre otras iniciativas, en la creación del Instituto de la Juventud.

Los objetivos de la política juvenil deben transformarse en planes y programas específicos que deben cumplir ciertas condiciones político-técnicas indispensables, que los hagan no solamente deseables, sino también factibles de realizar y con plazos de maduración inmediata¹.

En relación a la situación del Instituto de la Juventud, su tramitación legislativa ha estado sujeta a la crítica del principal partido de oposición, pese a lo cual recientemente pasó el trámite de la Cámara de Diputados con el apoyo de la UDI. Es lo más probable que la aprobación de la iniciativa estará sujeta a importantes concesiones que deberán hacerse en el curso de las próximas etapas de la tramitación - particularmente en el Senado.

Desde el punto de vista del logro de una gestión razonablemente eficaz en el área de las políticas juveniles debieran tomarse en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Definir con claridad, a efectos de la gestión interna del Gobierno, cuál es el campo específico que corresponde a las diversas instancias cuya acción se relaciona directamente con la situación juvenil. El Ministerio de Educación, la Digeder, y el Instituto de la Juventud son entidades que deben estar sometidas a algún tipo de coordinación que impida problemas de roces o de desentendimiento sobre áreas de políticas concretas.

Ya se han advertido pugnas entre el Instituto y el Ministerio de Educación, en torno a algunas de las áreas que el Instituto a definido como prioritarias. Lo importante en este plano es que una comisión o una entidad, oficiosa pero autorizada para ello, defina claramente los ámbitos de atribuciones y responsabilidades específicas, impidiendo la cristalización de formas de obstruccionismo burocrático que redundará en crecientes pérdidas de eficacia y cohesión del equipo gubernativo.

2. Las metodologías de trabajo del Instituto debieran ser clarificadas al máximo, relegando los equívocos a una mínima expresión. Solo así la nueva entidad podrá en un plazo corto ser funcionalmente operativa, con un perfil institucional bien estructurado: ello implica reglas claras en cuanto al sistema de funcionamiento, a la formación de proyectos, a la implementación de actividades, etc.

Una entidad como el Instituto no puede dejar de establecer este perfil, sin el riesgo cierto de verse sometido a dinámicas no controlables de las lógicas de los actores internos de la organización, con identidades políticas, profesionales, etc. características.

¹ El año 1992 será el último año de realizaciones del Gobierno que fijará los niveles de logro con que la ciudadanía evaluará la gestión gubernativa. De allí que sin desechar la realización de proyectos de largo aliento, políticas como las dirigidas hacia la juventud que tendrán necesariamente un alto componente simbólico deben en un grado importante plantearse metas realizables en un lapso no superior a los dos años.

3. Sin que ello signifique no realizar permanentes análisis y diagnósticos sobre la realidad juvenil, es preciso depurar el diagnóstico de base que inspira al Gobierno sobre la juventud. El funcionamiento del Instituto no puede estar sujeto a planes y programas basados en diagnósticos que no estarán disponibles antes de 1992. Es preciso delimitar el diagnóstico sobre la juventud que inspiró la creación del Instituto, de manera que no se generen nuevos focos de tensiones en torno a la realización de nuevos análisis.

4. Se ha hecho notar por opiniones expertas la existencia de una peligrosa continuidad entre la imagen de la juventud proyectada por el anterior gobierno y ciertas iniciativas tomadas en el actual. Durante 16 años el régimen autoritario deslegitimó el movimiento juvenil, siendo los jóvenes vistos desde las categorías de la desviación y la peligrosidad social; los jóvenes estaban sujetos al síndrome de la anormalidad: rebeldes, drogadictos, politiqueros, extremistas, etc.

Los sucesos vinculados con denuncias sobre el Movimiento Juvenil Lautaro, y una bien preparada ofensiva publicitaria relativa a la delincuencia, volvieron a poner en el centro de la discusión los mismos viejos temas ahora reiterados por la UDI y RN². El Gobierno aceptó de hecho la definición de la situación propuesta por la oposición (la juventud chilena como anormalidad), poniendo en primer plano los temas de la delincuencia y extremismo juvenil, de la drogadicción y alcoholismo, de los embarazos precoces.

Sería conveniente que el Gobierno cambie el discurso sobre la juventud, dirigiéndolo ahora a una juventud normal, pero que tuvo que vivir en un país anómalo. El objetivo implica plantear en el centro de la discusión el bienestar psico-social de los jóvenes, apelando a sus valores positivos, y generando un clima propicio al desarrollo de la autoestima y de la organización.

5. El énfasis que se ha dado por autoridades de Gobierno a los temas de la delincuencia, la drogadicción, etc., trae aparejada además consecuencias políticas inevitables. El tipo de carencias a que se refieren estos fenómenos son profundas, extremadamente difíciles de resolver, exigiendo metodologías costosas, de tratamiento en pequeños grupos o a nivel individual, y con una recuperación lenta.

Al subrayar el Gobierno los temas más difíciles se pone unos objetivos que, según especialistas, es imposible superar en tres años. De allí que la continuación del actual enfoque traerá aparejada en el mediano plazo, y de modo casi inevitable, la pérdida de confianza pública en el manejo de los problemas de la juventud.

6. En la elaboración de propuestas hacia la juventud debiera estimularse aquellas que no requieran un soporte burocrático y funcionario para su puesta en práctica. De ese modo, pueden evitarse vacíos importantes en las propuestas gubernativas hacia la juventud. Así por ejemplo, el énfasis en este tipo de recursos estatales tiende a producir proyectos que marginan a la juventud rural, sobre el supuesto que no hay suficientes recursos.

² "Hay que privilegiar el trabajo con la familia más que con la juventud. Hay sectores a los que les interesa trabajar con los jóvenes porque les resulta más rendidor: se los aísla de la familia, se los debilita en aquellas convicciones que puedan tener y luego se les llena ese vacío con el contenido que a ellos les interesa promover... Cuando falla la familia, el joven está más expuesto a la droga, alcohol, embarazos precoces, homosexualidad" (Dr. Ramón Florenzano, en La Segunda, 2-X-90).

De este modo, el Gobierno podrá convocar a políticas nacionales de Estado, en cuyo logro concurren junto al Gobierno entidades profesionales, culturales, científicas, educacionales, deportivas, etc., que podrán asumir responsabilidades concretas en las áreas de política definidas nacionalmente.

7. Si el discurso del Gobierno devuelve a la juventud su imagen de normalidad, se hace factible dar respaldo político y social a programas de organización juvenil. Hay una amplia experiencia recogida por expertos vinculados a la educación y a la Iglesia relativa a procesos psico-sociales de recuperación de la autoestima a través de la organización.

Esta organización juvenil debe ser facilitada por el Estado, pero el Gobierno debiera evitar asumir un rol dirigista en la promoción de iniciativas que pueden convertirse en focos de tensión, interna y externa, por su politización. Ello implica acentuar fuertemente iniciativas legales que den facilidades para la conformación de asociaciones juveniles, con fines recreativos, artísticos, culturales y científicos, pudiendo establecer relaciones de colaboración con asociaciones, fundaciones, iglesias y establecimientos educacionales, en la consecución de sus fines. Para incentivar el establecimiento de esta vinculación de las nuevas organizaciones juveniles con las entidades mencionadas pueden disponerse también medidas legales y tributarias, que fomenten este tipo de colaboración.

8. El joven en la actualidad está despolitizado, con un proyecto de vida que se sitúa con dificultad en el largo plazo. Dada esta situación, es preciso que los proyectos de corta maduración que el Gobierno debiera incentivar respondan a las demandas más inmediatas de la juventud. En este sentido, la música, la literatura, el deporte, pueden ser canales de organización que reviertan el proceso experimentado por la juventud chilena en los últimos años.

D. ANALISIS ECONOMICO

En el ámbito económico, la situación objetiva no ha presentado cambios significativos durante la última semana. Las cifras más preocupantes para los agentes económicos - el precio internacional del petróleo, el del cobre y las tasas de interés - no presentan variaciones sustanciales, y por tanto la situación externa e interna se ajusta a lo descrito en el informe anterior.

Sin embargo, durante los últimos días han ocurrido sucesos vinculados al plano económico que, si bien no modifican las cifras objetivas, hacen mirar al futuro con mayor confianza que hasta la semana pasada.

Si bien la oposición (especialmente la UDI) ha logrado transmitir con éxito el mensaje de que sólo parte de la inflación obedece al alza del petróleo, no pasa lo mismo con el slogan de que el actual equipo de Hacienda no es el más idóneo para conducir una economía de mercado, pues las medidas adoptadas para enfrentar la crisis han sido evaluadas como positivas por todos los agentes económicos activos. Por otra parte, el "paquete UDI" y el "paquete CUT" (la CUT catalogó el plan de Hacienda como incompleto, no lo descalificó) no han logrado aceptación más allá de sus filas.

La imagen que se ha presentado en la prensa (y no sólo opositora) de una pugna entre el equipo económico y el político es preocupante, más por la imagen del equipo político que por el económico, que frente a algunos sectores empresariales sale fortalecido como un grupo profesional, firme y coherente. Como nada es gratis, dicha imagen genera fricciones entre el gobierno y la CUT, cuyos dirigentes no quieren parecer rechazados por la autoridad a diez meses de las elecciones de nuevas directivas. Sin embargo, parece más factible negociar algunos puntos de reivindicación con la CUT en un contexto de confianza generalizada en el equipo económico, que revertir una situación de desconfianza desde los agentes productivos.

La soterrada tensión entre los objetivos de reactivar la economía, por una parte, y de mantener una inflación baja, por otra, parece entrar en un terreno más auspicioso a juzgar por el Informe del Banco Central en torno a la Evaluación de la Economía en 1990 y Perspectivas para 1991. En dicho reporte, el Banco Central declara que mantendrá el control de la inflación como una prioridad fundamental, pero que la política monetaria y financiera será compatible con un ritmo de crecimiento adecuado y sostenible en el largo plazo. Se habla de un crecimiento posible de 3 ó 4% en el último trimestre del año, y de 5% para 1991, junto con una tasa de inflación entre 15 y 20% para el próximo año, de no mediar nuevas alteraciones exógenas. El informe señala las favorables condiciones externas - Reservas y Balanza Comercial - e internas - Inversión - para reactivar la economía desde ya.

Se espera que la opinión unánime de los sectores productivos en torno a la idea de un "sobreajuste" y las insinuaciones del Ministerio de Hacienda, redunden en una decidida reducción de las tasas de interés ofrecidas por el Banco Central. Por ahora, la decisión del instituto emisor en orden a pagar intereses por los encajes obligatorios de los bancos comerciales (dinero que no pueden prestar y que se está desvalorizando día a día) implica reducir los costos de la banca y les permite reducir su tasa de colocación (reduciendo el "spread"), lo cual provocará entre 0.5 y 1 punto porcentual menos de interés mensual a los solicitantes de crédito. En este sentido se trata de una medida que tiende a reactivar.

A pesar de la inquietud por el petróleo, en Septiembre ya se manifestaron señales claras de reactivación. Por ejemplo, el comercio detallista incrementó sus ventas en 9.5% con respecto al mes de Agosto. Esto fue posible en la medida en que la cantidad de dinero privado en circulación creció 12.1% con respecto a Agosto, después de cuatro meses consecutivos de contracción.

El panorama para lo que resta del mes parece bastante manejable. En la medida en que las presiones sociales sean bien manejadas por un equipo político-económico homogéneo y coordinado, y paralelamente se perciba una reactivación en las ventas, que debería traducirse en incremento en la producción y el empleo más que en inflación, el gobierno puede recuperar la iniciativa y reponer sus objetivos de mediano y largo plazo, que no deben perderse de vista ni siquiera en las crisis más profundas, como no lo es ésta.

En este contexto, de un moderado optimismo realista, la presión de los sectores sociales - trabajadores y empresarios incluidos -se convierte en un arma del Ejecutivo contra eventuales acciones obstruccionistas de la oposición, o contra posturas intransigentes del Banco Central.